

Nombre y Apellido: Antonela Vicentini

Pertenencia institucional: Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral; Santa Fe, Argentina.

Dirección de correo electrónico: antonelavicentini@yahoo.com.ar

“La resignificación del conflicto en rechazo a la Resolución 125 (marzo-julio 2008) en los movilizadores de Pilar, Humboldt, San Jerónimo Norte y Franck (Santa Fe)”

El presente trabajo oficia de primer acercamiento a las indagaciones que estoy llevando adelante en el marco de la realización de mi tesina de estudios de grado en Sociología; este dato es importante al momento de circunscribir los alcances que tendrá esta exposición. Aquí se procederá a desarrollar un análisis que arribará a una hipótesis de trabajo que exigirá un tratamiento ulterior más pormenorizado; en definitiva, me detendré en escrutar el vínculo existente entre la convocatoria a las medidas de protesta en rechazo a la aplicación de la Resolución 125 por parte de la mesa de enlace de entidades agropecuarias, y las características particulares de la participación de los movilizadores en cuatro comunas del interior de la provincia de Santa Fe: Pilar, Humboldt, San Jerónimo Norte y Franck. Para ello, se explorará cómo operó una situación conflictiva en la iniciativa grupal de movilización, y cómo la posibilidad de que esto suceda estaría relacionada con los “recursos” de los que disponen los miembros del grupo; en este sentido, se recuperarán conceptos provenientes de los marcos teóricos elaborados por Lewis Coser y de Sidney Tarrow.

Contextualizando, en 2003, el presidente Néstor Kirchner emprende el rearmado institucional del país anclando su gestión en la recuperación económica que dejaría tras de sí la drástica caída de 2001; esta recomposición es explicada esencialmente por “el pasaje a un modelo productivo orientado a la sustitución, que apuntó a la revitalización de un sector de la industria nacional, así como por la rentabilidad de las exportaciones (maíz, soja transgénica, entre otros), beneficiadas tanto por la devaluación como por los altos precios internacionales” (Svampa; 2007). En el primer tramo de la presidencia de Cristina Fernández, en 2007, se accedió a profundizar la explotación del modelo extractivo-exportador en el mismo sentido que su antecesor, aunque con progresivos cambios en la alícuota a retener en la comercialización de estos bienes exportables; a fines de ese año la actual presidenta emprendió una serie de subas de las retenciones al agro que culminaron a principios de 2008 con la denominada Resolución 125. El entonces ministro de economía Martín Lousteau,

anunció “un esquema de retenciones móviles para la soja, el girasol, el maíz y el trigo y todos sus productos derivados para los próximos cuatro años [...]; para soja y girasol, aumentarían los derechos de exportación 44.1% y 39.1% respectivamente, mientras que las alícuotas para el maíz y el trigo se reducirían casi un punto a 24.2% y 27.1% respectivamente” (Barsky y Dávila; 2008:237). A estas acciones prosiguió una alineación sin precedentes de los intereses de los grandes propietarios nucleados en la Sociedad Rural Argentina, y aquellos que representan a los pequeños y medianos productores en la Federación Agraria Argentina, sumado a la aparición de los autodenominados autoconvocados provenientes del sector agropecuario; estos actores mantuvieron durante cien días un paro nacional que incluyó cortes de rutas, no comercialización de los productos derivados de esta actividad, y actos en varios puntos del país. Ahora bien, ¿cómo se inserta el planteo de la temática en este marco de sucesos?

En principio, parto de entender que, por un lado, se visualiza un reclamo a nivel nacional que asocia a la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias (que nuclea a Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONIAGRO)) con el rechazo de las modificaciones impositivas que propone la Resolución 125, puntualmente a un reclamo fundamentalmente ligado al aumento de las alícuotas de exportación de la soja. Si atendemos a la problemática alrededor de la que se circunscribió en la práctica el conflicto, podemos distinguir que si bien los anuncios a la suba de las retenciones afectaban tanto a la soja como al girasol, los cuestionamientos se hicieron notar en cuanto a las consecuencias negativas que esto acarrearía sobre la rentabilidad de la comercialización sólo de la primera oleaginosa. Esto puede ser explicado considerando la importancia en volumen exportado que ha ganado la soja, en detrimento de lo que ha sucedido con el girasol, el otro grano de exportación gravado por la Resolución 125. En el Cuadro 1 puede notarse cómo se fue dando a lo largo de los años un creciente proceso de “sojificación”, favorecida principalmente por la existencia de los altos precios internacionales y el desarrollo de técnicas de producción innovadoras que multiplicaron sus índices de eficiencia facilitando la expansión sin precedentes de su cultivo; esto no fue inocuo para la estructura productiva, ya que provocó la merma de siembra de girasol, par estacional de implantación. Dan testimonio de ello las zonas ocupadas por la soja, (que) “ha tenido una evolución sorprendente: de una superficie mínima implantada con soja en 1970-71 (37.700ha), se evolucionó a algo más de 2 millones de

hectáreas en una década, 6 millones de hectáreas en 1996-97; y 10 millones en la campaña 2000-01, y casi 16 millones de hectáreas en la campaña 2005-2006”¹.

Por otro lado, aquí cabe focalizar en la importancia que ha tenido la participación de los manifestantes convocados; sobretodo en la capacidad de articulación de medidas de protesta relacionadas con la movilización conjunta instrumentadas por éstos. En este sentido, la ejecución de los cortes de ruta se convierte en un dato significativo, no por el valor que posee en sí mismo sino como indicador de las potencialidades de organización de reclamos grupales por parte de los adherentes activos. El cuadro 2, que cuantifica la actividad relacionada con los cortes de rutas y vías públicas entre Agosto de 2007 y Julio de 2009 en todo el país, arroja resultados más que elocuentes; entre marzo de 2008 y junio de ese mismo año se produjo un agravamiento de los índices justamente por las protestas asociadas a las modificaciones en las retenciones. Este universo de personas movilizadas, da cuenta de la fuerte influencia que poseyó el nudo conflictivo desatado a raíz del repudio a la aplicación de la 125 a nivel nacional; desde este punto de vista se intentará especificar el tipo de descontentos en que se basó tamaña reacción en diferentes puntos del país. A los fines de este acotado trabajo, este análisis se centrará en observables empíricos previamente definidos.

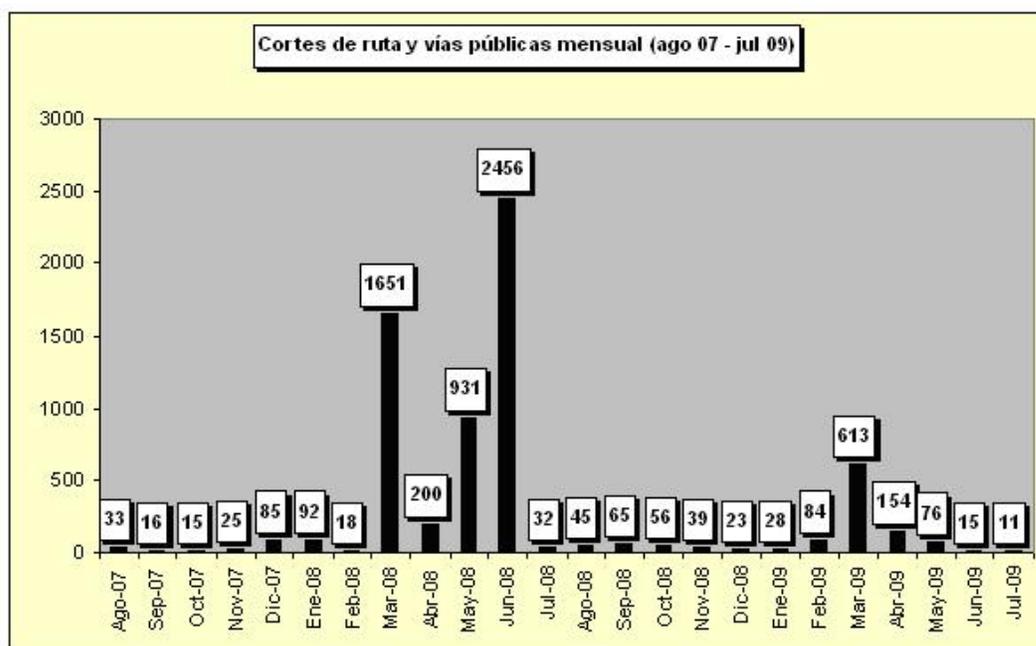
¹Fuente:http://www.inta.gov.ar/rafaela/info/documentos/economia/castignani_2009_sistemas_lecheros_mixtos.pdf

Cuadro 1

Exportación de granos en miles de toneladas		
Año	SOJA Total anual	GIRASOL Total anual
1990	3258.8	341.9
1991	4405.7	367.4
1992	3085.5	295.63
1993	2219.41	175.83
1994	2914.45	574.87
1995	2608.27	827.62
1996	2114.36	537.95
1997	724.97	54.1
1998	3193.68	454.23
1999	3411.89	880.11
2000	4136.07	219.65
2001	7453.84	69.44
2002	6170.63	311.14
2003	8850.61	215.01
2004	6667.82	34.03
2005	9822.63	87.04
2006	8177.1	29.28
2007	12028.2	41.58
2008	11847.2	22.27

Fuente: SAGPyA-Dirección de Mercados Agroalimentarios-Granos.

Cuadro 2



Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría-05/08/2009 por Josefina Ichaso

La indagación tendrá en cuenta cuatro objetos: Pilar, Humboldt, San Jerónimo Norte y Franck; estas localidades se encuentran en el centro de la provincia de Santa Fe, departamento Las Colonias, poseen 4545, 4425, 6036 y 4511 habitantes respectivamente según el Censo Nacional de Población del año 2001, y se hayan en una zona productora de bienes primarios fundamentalmente. Concretamente, forman parte de la cuenca lechera santafesina, región central de la provincia especializada en la producción de leche y sus derivados, aunque la agricultura es una actividad extendida entre los productores de la zona como única empresa o complementando con la tampera. Cabe agregar, por otro lado, que distan en aproximadamente 30 kilómetros una de otra, y comparten la accesibilidad a la ruta nacional número 70 y la provincial número 19 como vía de conexión hacia otros puntos del departamento y la provincia. Las cuestiones estructurales antes descritas, asociadas a los cambios en los derechos de exportación a los granos, atraviesan a todas las comunas, aunque presentando matices; según el Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002, en la época de siembra que abarca primavera y verano, Pilar y Humboldt dedicaron el 50 % de las hectáreas cultivables disponibles a soja temprana y tardía, mientras San Jerónimo y Franck lo hicieron en un 70 %, repartiendo la superficie restante entre maíz, girasol y sorgo, por nombrar los preponderantes. A primera vista, estos datos darían cuenta de razones suficientes para que estas localidades se unan a las movilizaciones del conflicto agrario 2008. De todos modos, se pecaría por omisión si se ignorara la importancia que poseen otros procesos que tienen alta incidencia en la situación productiva de la zona. El proceso de “sojificación” más arriba descripto fue coadyuvado por la expansión de la frontera agropecuaria que incorpora nuevas tierras y la invasión de superficies antes dedicadas a otros cultivos, pero también a fuerza de la apropiación de aquellas utilizadas para producción lechera. Con esto, el reemplazo de algunos tipos de producción por otros supuso pérdidas importantes de capital, como en el caso de explotaciones de actividad lechera, donde este tipo de comportamiento “ha provocado una significativa disminución en la cantidad de tambos en el país: de 30.500 tambos en 1988 (CNA’88), registros sucesivos informan 21.080 en 1995; 18.096 en 1998; 15.000 en 2002 y 11.805 en 2009 (Informe Lechero, 2009)”². Esto significa que si se tiene en cuenta el tipo de actividad al que se dedican predominantemente en esta zona, la lechería, y el avance que ha tenido el cultivo de soja por sobre ella, vale preguntarse ¿por qué una zona fundamentalmente lechera se moviliza por asuntos que atañen a la producción sojera? o, más precisamente, ¿cuáles son los efectos que posee el conflicto en el entramado relacional de estos grupos?

²Fuente:http://www.inta.gov.ar/rafaela/info/documentos/economia/castignani_2009_sistemas_lecheros_mixtos.pdf

Lewis A. Coser en su libro “Las funciones del conflicto social” (1956) presenta justamente al conflicto como término analítico; el abordaje propuesto se focaliza en aspectos que este autor considera que contribuyen a lograr cierta integración social, más allá de aquellos que puedan resultar disruptivos, o muchas veces destructivos para el orden social. Se trata de localizar los factores que estimulan la adaptación o el ajuste de determinadas relaciones sociales o grupos, apartando aunque no negando los agentes potencialmente negativos. De manera que Coser encuentra el punto de partida adecuado para explorar al conflicto como un elemento funcional que posee el efecto de que un grupo reduzca al mínimo sus diferencias internas logrando un consenso básico fundado en un sistema de valores e intereses en común, e incremente su cohesión por medio del vínculo conflictivo respecto de un grupo que le es externo u oponente; entendido así, el conflicto social abre oportunidades inusitadas de organización y consolidación de grupos hacia el interior de un cuerpo social. De acuerdo a este razonamiento, el conflicto suscitado a partir del rechazo a la Resolución 125, puede convertirse en un terreno fértil para la explicación de los acontecimientos de protesta surgidos a su luz; es decir, que de acuerdo a los rasgos antes descriptos, explorando la dinámica propia del evento conflictivo construido a nivel nacional, pueden comprenderse las características propias de la movilización de los adherentes activos a los reclamos en las localidades antes citadas.

Si nos detenemos en los participantes de la confrontación a nivel nacional, a grandes rasgos podemos distinguir dos grupos. Por un lado, se presenta al gobierno nacional en comunión con dirigentes sindicales y sociales, como es el caso de Hugo Moyano y Luis D’Elía, y sus respectivos movimientos; es decir, se configura un entramado en el que no caben distancias entre el ámbito de toma de decisiones, y los sectores que simpatizan en términos políticos con el gobierno nacional. Por otro lado, se presenta a la mesa de enlace y a los movilizadores de todo el territorio nacional como colectivo homogéneo que con el transcurrir del tiempo termina por ser calificado como el “campo”; en definitiva, se borran las diferencias que pudieran llegar a existir entre los sectores productivos que lo componen, así como también el espectro de productores diferenciados a los cuales representan cada una de estas instituciones. Ambos tejen sus posicionamientos en base a fundamentos puramente altruistas, ponen la mirada en las carencias y debilidades del otro, ya sea el interior del país o los ciudadanos más pobres; y refuerzan las fronteras entre ellos por los intereses puestos en, por un lado, dejar sin efecto la Resolución 125, y por el otro, que se disuelvan las medidas de protesta convocadas. El rechazo recíproco basado en el autoritarismo y la obstinación,

moviliza energías defensivas que dejan al conflicto sin opción de salida; en este sentido, la solidaridad prestada por otros sectores de la sociedad, algunos segmentos de la sociedad civil u organizaciones sociales y sindicales, tiene un rol central en la persistencia en estas posturas, ya que enaltecen las convicciones. En definitiva, la puja parece querer dirimirse con la búsqueda de un ganador y por ende un perdedor, siendo este último el que abandone primero su cometido, vaciando la contienda de contenidos que no remitan a la confrontación como fin en sí misma.

Ahora bien, teniendo en cuenta los observables empíricos que aquí son trabajados, es pertinente identificar las características propias que asumieron los colectivos de movilizados de cada uno de ellos; es decir, que aunque éstos se hayan pronunciado a favor de manifestaciones que tuvieron una amplia trascendencia de manera global en todo el país, cabe preguntarse ¿de qué manera se insertan en este contexto las particularidades del conflicto en las comunas bajo estudio? ¿cómo se redefinen los intereses, y por ende las demandas, de los grupos de movilizados en cada una de estas localidades?. A partir de los dichos de los protagonistas recavados, se han podido trazar dos líneas explicativas que se sustentan recíprocamente. Una, que advierte una actualización de la dinámica propuesta anteriormente, en los términos de una conformación grupal en clara oposición a la forma de proceder del gobierno nacional; y otra, que señala un reforzamiento de la interioridad del grupo alrededor de intereses apartados, o no alineados idénticamente, con las manifestaciones en rechazo a la aplicación del nuevo régimen impositivo. De manera que, en primer lugar, cuando se le pregunta a éstos acerca de qué es lo que los empujó a la movilización, así como también las razones por las cuáles estalló la situación conflictiva, los entrevistados de las cuatro comunas tienen apreciaciones más o menos homogéneas; se evidencia cierta incomodidad acerca de la modalidad de accionar del gobierno nacional, sobretodo en relación a cierta inflexibilidad y falta de deliberación repudiada por los entrevistados, hasta sentida como una cuestión personal de parte de la presidente en contra del sector. En esta línea, se presenta a la acción conjunta de cada grupo asociada a la reivindicación por parte del sector frente a los ‘abusos’ del gobierno nacional. Este conjunto de percepciones de los miembros de cada colectivo, los agrupan alrededor del despliegue de determinada fuerza y destreza para doblegar las intenciones del gobierno de turno, convirtiendo este elemento en un componente identitario que cimienta el entramado de relaciones; de ahí que podemos comprender que esta confrontación de valores respecto de un contrincante definido como soberbio y terco, refuerza, el menos en primera instancia, la integración hacia el interior de cada grupo. El gobierno nacional, concentra en este sentido, ciertos atributos indeseables que son

susceptibles de ser controlados demostrado intransigencia; de manera que no resultan llamativas las referencias que reducen los objetivos de los grupos de manifestantes a “ganar la pulseada”. Así es que la máxima aspiración se centra en un todo o nada en nombre de la integridad del grupo, siendo notoria la tendencia a la utilización de calificativos homogenizadores; el “campo” es sinónimo no tanto de unidad, lejana en tanto se vislumbra discrepancia de intereses, sino “de unión en contra de”.

En consecuencia, la reafirmación de determinados valores en contraposición a los de otro, visto como un enemigo en esos términos, alienta la cohesión interna propiciando la reafirmación de intereses; en este caso en particular, puede decirse que los colectivos de movilizadores de cada una de las comunas agruparon sus demandas específicas de manera tal de darles expresión en el marco del conflicto más amplio. Esto da como resultado una reconfiguración del conflicto por el aumento de las retenciones, haciendo de cada grupo de adherentes activos, la manifestación de un estado de cosas específico ya instalado como problema local a dirimir con el gobierno nacional. De manera que puede caracterizarse una situación conflictiva específica en cada colectivo, que a su vez responde a particularidades estructurales de la zona en la que se encuentra anclado cada pueblo.

En el caso de Franck, se reconoce que entre los productores entrevistados se ha producido una mudanza, aunque con diferentes gradaciones, desde la actividad tampera hacia la actividad agrícola; las variaciones radican en que si bien hay algunos que han abandonado por completo el tambo, otros solamente han diversificado su actividad. Los fundamentos de estos diferentes tipos de migración se explican por la alta rentabilidad que la soja ha manifestado en detrimento de la producción de leche; es decir que, los productores han apostado a no desaparecer como tales, cambiando de rubro. Esta situación por la que atravesaron posee dos derivaciones estrechamente relacionadas muy importantes al momento de analizar el posicionamiento que ha adoptado este colectivo de manifestantes. Por un lado, han podido tener mejoras considerables en su situación económica a raíz de los volúmenes de dinero que generaron a partir del vuelco a la producción sojera, pero a costa de convertirse en productores entre pequeños y medianos de esta oleaginosa. Por otro, en la base de su reacción está la cuestión de que se han visto obligados a dejar la actividad lechera o combinarla con la agrícola a causa de que permaneciendo allí no podían contar con los réditos económicos que esperaban, y ahora, la aplicación de la 125 los ponía en el mismo lugar; siempre asociado a su condición de pequeños y medianos productores, emerge el sentimiento de amenaza que les provoca el proceder del gobierno nacional en términos de regulación del mercado.

En San Jerónimo Norte se han manifestado fundamentalmente los lecheros que temen que desaparezca su actividad; existe esa posibilidad en tanto identifican factores indicativos de que ello comenzó a suceder desde ya hace tiempo y tiende a agravarse. Además del magro precio pagado por la leche a partir de 1998 que fue uno de los decisivos al momento de migrar a la producción de soja, existen otros igualmente mensurables. Por un lado, las tareas que implican llevar adelante la producción de leche son altamente desgastantes físicamente si las realiza el mismo productor, o económicamente desventajosas si necesitan de una erogación mensual de dinero, entre sueldos, cargas sociales y seguros, al delegarlas a puesteros; esto se reduce en el paso a la producción agrícola en tanto se trata de un trabajo intenso pero que se realiza sólo dos veces al año, que si es hecho por otras manos implica unos pocos trabajadores que inclusive pueden ser contratados exclusivamente para esa tarea sin acarrear demasiados gastos. Por otro lado, y esto suma una dificultad a lo anterior, se evidencia escasa mano de obra disponible para desempeñarse como tambero, ya que es cada vez más difícil que alguien quiera quedarse a vivir en el campo para atender a todas las necesidades que requiere esta actividad. Aquí los entrevistados no se han pronunciado entonces en contra de la 125 específicamente, sino que han sumado su solidaridad al reclamo sojero en vistas de defender la supervivencia de su sector; esto bajo el argumento de que el sector tambero se encuentra en la región ya desestructurado por la desaparición de establecimientos, y por fuertes fracturas hacia el interior de las entidades gremiales que lo representan.

Cuando nos remitimos a Pilar el encono de los adherentes activos respecto el gobierno nacional, se aleja aún más de la órbita del rechazo propuesto a la 125. Aquí desde la cúpula hasta las bases han sido sustentadas con los productores tamberos que ya vienen manifestándose por el bajo precio de la leche desde el año 2000, y que han insistido con sus reclamos durante el período 2005-2007 si nos referimos a la era Kirchner; de ahí que el conflicto de 2008 se utilizó como momento ideal para negociar estos problemas con el gobierno nacional. Se trata de un sector que ha trabajado mucho en reconstruir su situación estructural, intentando fundamentar su postura de recomponer el precio de la leche pagado a los productores; los diagnósticos arrojaban que el último eslabón de la cadena, la comercialización, se llevaba gran parte de las ganancias si se tomaba en cuenta comparativamente lo que éste aportaba al producto y lo que en definitiva sumaba al precio de la leche en góndola. Resulta que los lecheros de esta localidad adhirieron al paro agrario para contribuir, desde la defensa de sus intereses, a la unión para pedir por las necesidades de todos los sectores, y se enfrentaron a la indiferencia de los dirigentes gremiales. Finalmente, las distancias entre el reclamo de la mesa de enlace y el de los movilizados de esta comuna,

fundan las discrepancias entre ellos y la quita de apoyo que tuvo que sufrir la protesta del sector agrícola. Esto argumenta la merma de las medidas de protesta en la zona a los veinte días de haber comenzado, y la consecuente negociación de los productores lecheros con el gobierno nacional fuera de la influencia de la mesa de enlace; este proceder resultó muy controvertido, y no sólo sembró escisiones hacia el interior del movimiento de marzo de 2008, sino que alimentó la ruptura a la que hacen referencia los movilizados de San Jerónimo Norte.

En el caso de Humboldt, la lucha que se libra con respecto al gobierno nacional se encuentra asociada a toda su dinámica decisional; esto implica que el disconformismo se deja ver no sólo respecto de aquellas políticas que involucran algunos de los tres sectores productivos del “campo”, sino que se extiende hacia otros ámbitos. En este sentido, estos manifestantes encarnaban la defensa de todo un país en contra de los abusos de parte de los dirigentes del estado; la situación injusta que estaba atravesando el sector con la aplicación de la 125 era análoga a la que padecía la sociedad toda, en ese momento, con la promulgación de la Asignación Universal por Hijo. Esta postura estaba respaldada en primera instancia por la defensa del federalismo, y por ende, el repudio a la concentración del poder político y económico en la capital; y en segunda instancia, por la protección de la dignidad como productores pero antes como personas. Este posicionamiento marca una diferencia notoria con los manifestantes de otros pueblos respecto a la toma de parte activa en campañas de desprestigio de los senadores y diputados opositores a su iniciativa, “escraches”, y eufóricas expectativas frente a las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009 donde el oficialismo había perdido la mayoría en el Congreso.

A partir de este análisis puede comprenderse que conflicto a nivel nacional encauzó las demandas propias de cada comuna al reforzar la integración hacia el interior de cada grupo, aunque no puede entenderse necesariamente que a partir de ello los individuos hayan coincidido en un reclamo colectivo; sino que más bien, la capacidad explicativa de estos argumentos adquiere relevancia en tanto puede concebirse al conflicto en repudio a las medidas impositivas como una oportunidad, en el sentido que da Tarrow (1997) al término, de que los movilizados canalicen reclamos y desacuerdos respecto el gobierno nacional, gestados bajo circunstancias particulares de cada grupo. Este autor afirma: “al hablar de estructura de oportunidades políticas, me refiero a dimensiones consistentes-aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales-del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente” (Ibíd.:49). Se trata entonces de que cada uno de los colectivos de personas movilizadas en estas localidades adhirió y contribuyó a la expansión del conflicto 2008 bajo demandas y por ende intereses específicos, porque vio la posibilidad de que sus

reclamos sean escuchados por el gobierno nacional; esto quiere decir que se pretendió utilizar el apoyo concedido al reclamo llevado adelante por la mesa de enlace como oportunidad de que este entramado de personas influyentes y con cierta capacidad de presión viabilizaran la solución a los problemas defendidos a nivel local. Ahora bien, esta coyuntura favorable sólo pudo ser capitalizada por la posibilidad que poseen estos actores de echar mano a recursos organizativos y relacionales ya madurados en otras ocasiones. Es decir que, por un lado, fue de fundamental importancia contar en la zona con dirigentes del sector lechero que ya se habían desempeñado como organizadores de las medidas de protesta por el precio de la leche en la zona; éstos forman parte de los Centros de Tamberos a nivel local, como lo es en el caso de Pilar, Humboldt y San Jerónimo, y de representantes de la Mesa de Lechería Provincial, como el impulsor de los reclamos en Pilar. Así mismo, no se puede desestimar la trayectoria de liderazgo del organizador de la movilización de productores en Franck; este se desempeña hace 10 años como gerente de la Mutual del Club Atlético Franck, entidad que brinda apoyo financiero a sus asociados. Por otro lado, cabe puntualizar que los adherentes, o las bases de movimiento, fueron reclutados de las relaciones interpersonales o institucionales previas de los dirigentes. Es el caso de los participantes que ya habían estado presentes en los paros lecheros años atrás, como sucedió en Pilar, San Jerónimo, Humboldt, y Franck; así también la sede de Agricultores Federados Argentinos en Humboldt, la Cooperativa Guillermo Lehmann en Pilar, los asociados a la Mutual de Franck, a los que se sumaron algunas personas que han dejado ver su iniciativa de participación al militar en alguna organización política o civil local. Éstos son factores de peso si se piensa en la preexistencia de un grupo predispuesto a la movilización y de cabecillas conformados como tales en otras coyunturas, que facilitan la instrumentación de la jornada de protesta en tanto recogen las prácticas de sus trayectorias de participación. Debe tenerse en cuenta además, la capacidad que poseen estas condiciones para fundar un panorama morfológico donde los manifestantes hayan podido recoger los repertorios de protesta ya utilizados; la experiencia en los bloqueos enfrente de las empresas lácteas y la logística que implica organizarlos, fue sin duda un elemento de peso al momento de instrumentar los cortes del ruta del último conflicto. En definitiva, en términos formales podría decirse que el conflicto derivado de la aplicación de retenciones móviles constituyó una coyuntura favorable para la organización de la acción conjunta de actores que ya disponían de recursos para su construcción.